



“El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte”: Ignacio Ellacuría

Editorial

2

A propósito de “El economista”

Político

4

La izquierda latinoamericana en perspectiva

Económico

6

El CAFTA: la última batalla en el Congreso de los Estados Unidos

Social

8

Reflexiones en torno al diálogo, hoy

Regional

10

Incertidumbre alrededor del CAFTA-RD

Reporte IDHUCA

12

Libertad de expresión en El Salvador

Documento

14

Introducción a Objetivos de desarrollo del milenio

A propósito de “El economista”

La primera impresión que se tiene de “El economista”, de La Prensa Gráfica, es que es una publicación destinada a promover una imagen de los hombres más ricos de El Salvador como hombres de saber. No sólo como hombres a quienes les gusta el saber, por ejemplo como promotores o mecenas, sino como agentes ellos mismos de saber. Los hombres ricos de ahora, a diferencia de los de antes a quienes el saber les resbalaba, quieren proyectar una imagen no tanto de intelectuales, sino de académicos, de personas con títulos que, además de tener puestos de mando en instituciones académicas —de los que ellos son fundadores y principales directivos—, pretenden hablar (y escribir) con la seriedad de los científicos.

No es cualquier ciencia la que a ellos les gusta, sino una en particular: la ciencia económica, esa ciencia de la cual —en algunas de sus versiones— han sabido hacer buen uso para que el engranaje de sus negocios funcione mejor, es decir, les arroje mayores beneficios. La ciencia política —algunas versiones de ella— a ratos parece llamar su atención, pero, por lo menos hasta ahora, es la economía la que los tiene embelesados. “El economista” es, en este sentido, una plataforma para que los ricos más ricos de El Salvador se promuevan, al menos al nivel de imagen, como hombres de saber, legitimando de esa forma sus privilegios y su ascendencia sobre el resto de salvadoreños.

Pero la importancia de “El economista” no se agota en lo anterior. Y es que al leer sus reportajes sobre el éxito de algunos de los empresarios más ricos del país salta a la vista la abismal distancia que existe entre ellos y la mayoría de salvadoreños. Definitivamente, esos empresarios viven en otro mundo, un mundo ni siquiera imaginado por quienes no cuentan con lo mínimo para sobrevivir.

En El Salvador hay, ni qué dudarlo, dos países: el de unos pocos ricos, donde las ganancias se cuentan por millones, y el del resto, donde los ingresos para vivir son escasos, donde las deudas son agobiantes y donde la opción para sobrevivir es dejar a la familia para emigrar a Estados Unidos. Aunque en “El economista” los salvadoreños comunes no son los protagonistas, cuando se habla de todo lo que han ganado algunos de los hombres más ricos del país (junto con sus empresas) se habla —sin quererlo— de la distancia infranqueable que existe entre ellos y la mayoría de salvadoreños.

Es a esos empresarios exitosos a quienes “El economista” dedica sus reportajes; es su imagen la que se promueve en sus páginas. Son parte de otro mundo; son lo opuesto del mundo de la mayoría de salvadoreños. Entre ellos y esa mayoría hay una distancia abismal, en oportunidades, opciones de vida, consumo, alimentación, salud, esparcimiento, etc. Ellos se saben parte de otro mundo; saben que a ese mundo nunca tendrá acceso la mayoría de salvadoreños, porque, en el momento en que ello llegara a suceder, desaparecería su mundo de sueños convertidos en realidad. Quizás en su visión, la única forma en que eso puede evitarse es concentrando y aumentando la riqueza cada vez más, de modo que la distancia entre ellos y el resto —la mayoría— sea cada vez más nítida e insuperable.

Aunque a muchos no les guste, ciertas versiones de la ciencia económica y ciertos economistas están al servicio de ese otro mundo en el que la riqueza y el consumo ostentoso son lo más importante. Esa economía y esos economistas tienen como tarea primordial dotar de una presunta fundamentación científica al engranaje económico que permite que unos pocos concentren abusivamente la riqueza del país. Es al mundo de esos pocos al que sirven esos economistas y esa economía; el mundo del resto, de esos a quienes día a día les cuesta sobrevivir con un magro salario o con ingresos ínfimos ganados realizando tres o cuatro actividades, no es algo que preocupe a quienes han hecho de la ciencia económica una sierva del poder. Los sin poder son, a lo sumo, una variable más, que se lee en función del modelo económico —un modelo que excluye a amplios sectores sociales—, cuya salud es lo máspreciado. Precisamente, al cuido de esa salud se deben esos economistas que se han olvidado de las raíces éticas de la economía.

En fin, si se lee con una mínima dosis de criticidad, mucho de lo anterior sale a relucir desde las páginas de “El economista”. Pero también sale a relucir algo más: el mito del empresario que se hace rico (o más rico) por obra y gracia de sus propias habilidades, por su capacidad de asumir riesgos, por su osadía. Es decir, el mito del capitalista visionario que, con sólo sus energías, se lanzó a la aventura de “competir contra el mundo”. Se trata de un mito y nada más. Porque, en realidad, los ricos más ricos de El Salvador han amasado enormes fortunas gracias a la complicidad del Estado, concretamente de las tres pasadas administraciones de ARENA.

Algunos de ellos dirán que antes ya tenían dinero y quizás sea cierto. Pero al escharbar un poco la trayectoria histórica de los grupos de poder en El Salvador, específicamente a lo largo del siglo XX, sale a relucir —antes como ahora— la complicidad estatal. Y es que El Salvador, salvo algunos interludios en los que insinuó algún tipo de autonomía (relativa), el Estado ha servido expresamente (aunque diferenciadamente) a los intereses de los grupos de poder económico.

Desde el gobierno de Cristiani, los ricos más ricos de El Salvador han usado al Estado a su antojo, lo han saqueado y lo han debilitado. Ellos tienen dinero de sobra, mientras que el Estado a duras penas puede enfrentar sus compromisos financieros y de inversión social porque sus ingresos son escasos. Como expertos que son en el arte de amasar dinero sin reparar en nada, tienen la convicción —heredada de la vieja oligarquía— de que la riqueza y los privilegios no se comparten con nadie. Los funcionarios de Estado los respetan y les temen, cuando no son sus cómplices complacientes en el negocio de expoliar a quien tenga algo que ofrendar a ese altar sagrado que son sus empresas. Tienen al país en sus manos y van a la caza de Centroamérica. Se precian de acaparar riqueza sin cesar y sobran intelectuales y periodistas que aplauden esa voracidad, se identifican con ellos y los presentan como modelos para todos, modelos de los cuales sólo los envidiosos (es decir, los fracasados) no se pueden sentir orgullosos.

Un verdadero fracaso como actores de un proyecto viable de país: eso es lo que son los ricos más ricos de El Salvador. Lo que los enorgullece —y es aplaudido por quienes están dispuestos a vender su dignidad por unos cuantos dólares— es lo que está llevando a un callejón sin salida a la sociedad salvadoreña.

La izquierda latinoamericana en perspectiva

Desde sus inicios en la lucha por el cambio, al principio del siglo pasado, la izquierda latinoamericana ha conocido más derrotas que victorias. Lucha tras lucha, sucesivamente, las distintas oligarquías locales, con el beneplácito de los ejércitos regulares y en alianza la mayoría de las veces con los Estados Unidos, se las han arreglado para truncar los sueños más preciados de estos viejos idealistas. El financiamiento ilegal de la guerrilla antisandinista por parte de los Estados Unidos, el golpe de estado en contra del presidente chileno Salvador Allende en 1973, o el naufragio ensangrentado de la revolución guatemalteca en 1954, son algunos ejemplos que recuerdan este hecho.

Esta constatación no pretende restar importancia, ni mucho menos invalidar los sacrificios de quienes en América Latina siempre han soñado con mejorar la vida de sus hermanos. Muchas personas han dejado su vida a lo largo de estos siglos, porque solamente creyeron que valía la pena sacrificar la propia vida con la ilusión de cambiar positivamente la de los demás. Dicho lo anterior, sin embargo, no se puede borrar la imagen de las derrotas consecutivas de los intentos que se han hecho desde la izquierda para transformar las sociedades latinoamericanas.

La preocupación principal de los izquierdistas latinoamericanos ha sido siempre la de cambiar el orden económico y social. En un texto precursor de estos luchadores sociales y políticos, decía José Martí, tan temprano como en 1891, que había que hacer causa común con los oprimidos “para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores”. De modo que los opresores, locales y/o extranjeros, han sido (y algunos afirmarían que siguen siendo) las fuerzas contra las que pelean quienes han anhelado un cambio en el panorama social, económico y político latinoamericano.

Pero, por otro lado, Martí recomendaba, como único modo de liberar a los países latinoamericanos de las tiranías de los intereses de los oligarcas, gobernarlos conforme al conocimiento del medio. Decía el pensador cubano, “la universidad europea ha de ceder a la universidad americana”, (...) “los estadistas naturales surgen del estudio directo de la naturaleza y no de copiar postulados foráneos”. Para él, la realidad latinoamericana “de los incas a acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia”. En consecuencia, se forjó el siguiente lema martiano: “injétese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas”.

No se puede afirmar que los líderes de la izquierda siempre han estudiado en la escuela de la naturaleza latinoamericana. Para colmo de la ironía quienes han hecho un mejor uso político de los orígenes culturales de los latinoamericanos ha sido la derecha. Quizá este hecho explique las pocas conexiones (o cuando las ha habido, han sido efímeras) entre los pueblos latinoamericanos y sus líderes izquierdistas. Porque también, hay que decirlo, la mayoría de las veces el fracaso de la izquierda encuentra su más plausible explicación en la falta de apoyo popular a sus luchas.

Finalmente, habrá, sin duda, interpretaciones divergentes sobre las razones que explican el reiterado fracaso político de la izquierda. Pero no cabe duda que la represión sistemática, el asesinato o desaparición de los simpatizantes del cambio han creado un clima de terror que ha paralizado a muchos ciudadanos latinoamericanos.

Sin embargo, luego de las transiciones a la democracia en la región, se esperaba que la izquierda tuviera un mejor destino. Es cierto, sigue la ofensiva de la derecha en contra de quienes se considera como marxistas, a los que se les acusa de ser incapaces de dirigir

una economía ya globalizada, cuyos principales actores son las fuerzas capitalistas. Gracias a la apertura política observada, el fin de la represión sistemática y el alejamiento de los militares de la vida política, se esperaba que el discurso de cambio de la izquierda cobrara un nuevo impulso. Además, todo se da en un ambiente de pobreza y de crisis económica, en donde no ha cesado de ampliarse la brecha entre los más pobres y los más ricos. En otras palabras, la situación está más que propicio a las reivindicaciones de la izquierda.

Sin embargo, como ya se ha dicho, en general la izquierda latinoamericana ha obtenido unos resultados electorales bastante alejados de sus sueños. En pocos países ha logrado hacerse con el poder político. Y, cuando lo ha hecho, se ha limitado a administrar las economías de sus países exclusivamente dentro de los límites permitidos por las instituciones internacionales. Esta realidad hace surgir dos preguntas básicas: ¿cuáles son las circunstancias que favorecen la toma del poder por parte de la izquierda en esta coyuntura democrática? Y, en segundo lugar, ¿se puede seguir soñando con la transformación radical de las sociedades de la región?

Sobre las circunstancias en que llegan al poder los partidos de izquierda, todos parecen estar marcados por un deseo de cambio por parte de las poblaciones. Frente a la dominación exclusiva de las elites de derecha y la incapacidad de éstas para resolver los problemas de las sociedades latinoamericanas, la izquierda se presenta como una alternativa cómoda, en la medida en que se muestre a la altura de las circunstancias.

Este “ponerse a la altura de las circunstancias” hasta ahora parece suponer el abandono de los discursos radicales marxistas y una amplia alianza con diferentes sectores autónomos, no necesariamente provenientes de la tradición izquierdista, pero críticos con los resultados de la aplicación de las políticas neoliberales. Ni siquiera el caso de Hugo Chávez, el más radical de los presidentes latinoamericanos que se reconocen en la tradición política de la izquierda, constituye

una salvedad a esta constatación. Chávez llegó al poder gracias al apoyo de amplios sectores de la sociedad venezolana, que estaban dispuestos a operar algunos cambios (cada uno, sin duda, en grados diversos) en una sociedad ya marcada por la esclerosis. La radicalización del coronel vino después de su ascensión a la presidencia.

El mismo destino han tenido los izquierdistas de Brasil y de Uruguay —aunque su radicalización ha sido menor que la del presidente Chávez—. Quizá el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador debería de aprender la lección si quiere llegar a la máxima responsabilidad política. Es decir, moderar un poco más su discurso y dar suficiente garantía a la sociedad que no volverá a las posturas marxistas de antaño. A la vista de las circunstancias, no podría soñar siquiera con dar la sorpresa una vez en el poder. La fuerza armada, la oligarquía financiera y los Estados Unidos impedirían cualquier “rumbo equivocado”.

Esta última afirmación lleva a la pregunta acerca de los límites inherentes a la acción política de los gobernantes provenientes de la izquierda. Frente al aumento creciente de la miseria y la exclusión social de los más pobres, las elites no han abandonado sus viejos reflejos autoritarios. Los ejércitos regulares latinoamericanos siguen siendo los garantes de la riqueza de las oligarquías. Además, los sectores más conservadores de la diplomacia estadounidense no tolerarán aventura política revolucionaria alguna que pretenda replantear los términos económicos de las relaciones de dependencia con las economías de la región.

Estos condicionantes de la acción política de la izquierda latinoamericana, lejos de llevar a la desesperanza implican creatividad y audacia para no renunciar a los ideales de la justicia y la solidaridad entre los miembros de la sociedad. El ambiente hostil en el que tienen que desenvolverse los políticos de izquierda impide concretarse los sueños de transformación radical de la región desde el punto de vista social, económico y político. En este sentido, no existe diferencia entre los objetivos de la batalla de entonces y la de ahora.

El CAFTA: la última batalla en el Congreso de los Estados Unidos

Esta semana se llevará a cabo la votación final para la aprobación del CAFTA en el Congreso de los Estados Unidos. En los últimos días, diversos sectores de la sociedad estadounidense han expresado su posición ante el tratado. Destacan las opiniones de los congresistas republicanos y demócratas. Los primeros presentan el tratado como un instrumento para ayudar a los países centroamericanos en el proceso de desarrollo. Para ellos, el CAFTA no es exclusivamente una medida económica que vendrá a favorecer a los países suscriptores, también es un componente importante para la consolidación de la democracia de la región. Por otro lado, los congresistas demócratas sostienen que el CAFTA es una medida que atenta en contra de los trabajadores de los países negociantes y contra la estabilidad política debido a que muchas de las normativas que involucra el acuerdo no respetan la condición de los trabajadores de dichos países.

En El Salvador, al igual que en los EEUU, también existe una división debido al acuerdo comercial. El gobierno y las voces que lo secundan están convencidos que la medida es importante para la reactivación de la economía. EL TLC con EEUU podría traer nuevos flujos de inversión al país, lo cual contribuiría a elevar el nivel de empleo. También podría provocar un incremento de las exportaciones hacia los EEUU aportando a la reducción del déficit comercial. En oposición a estas ideas está la izquierda. Para los diputados de oposición, el acuerdo económico es una medida imperialista que consolidará la situación de dependencia del país con respecto a los Estados Unidos. Además, el proceso de intercambio comercial de bienes y servicios junto a la entrada de los flujos de capital beneficiarán exclusivamente a los grandes empresarios del país.

¿Qué pasa en el Congreso de los Estados Unidos?

En la última semana de negociación, ha iniciado un fuerte proceso de cabildeo para que algunos de los sectores de la industria estadounidense que se sienten afectados ante el CAFTA comiencen a ceder en su posición. En esa dirección, previo a dos días para la votación final, el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles (NCTO, por sus siglas en inglés) dijo que se siente agradecido por las mejoras que se han hecho en el tratado. Específicamente, las empresas norteamericanas fabricantes de telas para bolsillos, se libran de la amenaza de perder hasta 100 millones de dólares en exportaciones anuales a la región, mientras que los fabricantes nicaragüenses de pantalones tendrán que incrementar sus compras de telas estadounidenses en 90 millones de dólares si desean utilizar los actuales niveles de preferencia arancelaria para sus exportaciones de pantalones.

Esta concesión hecha a favor de los empresarios textiles de los Estados Unidos ha provocado que por lo menos cuatro legisladores ligados a intereses textiles se comprometan a votar a favor del tratado. Estos votos pueden ser determinantes en la votación final que se llevará a cabo en la Cámara de Representantes. De esta manera, el gobierno de George W. Bush estaría dando un paso importante para lograr la ratificación del CAFTA.

El presidente del Consejo Nacional de Organizaciones Textiles se encuentra tan a gusto con los logros que, después de varios meses de continua aversión contra el tratado comercial, ha dicho que el CAFTA "es ahora un acuerdo que merece apoyo". Los congresistas republicanos incitan a los demócratas diciendo que ahora no existen excusas para oponerse al tratado debido a preocupaciones textiles. Otro de los métodos que se encuentra utilizando el

ejecutivo norteamericano para lograr los votos de algunos de los congresistas es la concesión de fondos para la construcción de calles y puentes. Aún con esos logros del gobierno de Bush, hay voces que afirman que la votación final será muy complicada. De hecho, hay quienes aseguran que aún faltan 20 votos para que el acuerdo sea aprobado en la Cámara de Representantes.

La que continúa pareciendo como una muralla infranqueable es la Alianza Americana de Azucareros (ASA, por sus siglas en inglés). Jack Roney, representante de la gremial, dijo a los medios que confiaba en que el TLC fracasaría por un “margen reducido”, pese a los esfuerzos del gobierno de Bush, para convencer a los republicanos de estados azucareros clave como Florida, Louisiana, Montana y Idaho.

El gobierno salvadoreño se encuentra preocupado ante la votación. La ministra de economía, Yolanda de Gavidia, ha dicho que “existen dos posibilidades: que se ratifique y que se rechace. (Esta) nos dejaría por el momento sin el Tratado”. La funcionaria agregó que en el caso de que el gobierno de los EEUU no tenga asegurados los 218 votos para la aprobación del CAFTA, puede optar por pasar la plenaria de votación hasta el mes de septiembre. Sin embargo, esta medida tendría muy poco sentido cuando se reconoce la gran cantidad de esfuerzos que ha hecho el gobierno estadounidense y los de los países suscriptores para ratificar el acuerdo lo más pronto posible.

Por otro lado, la oposición en el país está alegre de la posibilidad que no pueda ratificarse el TLC. El economista asesor del FMLN, Salvador Arias, dijo estar contento de haber establecido alianzas con sindicatos y gremios estadounidenses para oponerse al tratado. En detalle, Arias dijo es una victoria positiva para los pueblos de Centroamérica porque considera que los apoyos conseguidos con los demócratas y republicanos que se oponen al tratado están “seguros”, por lo que la votación, según sus

cálculos, no alcanzará los 218 votos necesarios para avalar el acuerdo. También acusó a George W. Bush de la compra de votos a través de concesiones a favor de varios congresistas republicanos y demócratas que son reacios al acuerdo comercial.

Economía y política

Durante este proceso de fuertes debates que se ha concentrado en la Cámara de Representantes de los EEUU se puede ver cómo los intereses económicos y políticos se combinan para lograr la ratificación del CAFTA. Siempre ha resultado interesante el hecho de que muchos economistas, en afán de la “rigurosidad científica”, se han dedicado a entender la economía como una ciencia constituida exclusivamente sobre la base de relaciones de precios y cantidades en el mercado. La realidad social es más compleja y una aproximación más rigurosa de los hechos económicos no puede lograrse exclusivamente a través de modelos económicos cimentados en matemáticas avanzadas.

En el caso del CAFTA, tal como lo reconocieran varios funcionarios del congreso estadounidense: “una derrota del TLC tendría claramente implicaciones más grandes que apenas el acuerdo”. En ese sentido, el periódico *The Washington Post* sostiene que el TLC se ha convertido al interior del Congreso en una decisión de menor importancia frente a la dimensión política que éste representa debido a la lucha partidaria existente entre los congresistas demócratas y republicanos. En este sentido, el tratado comercial no tiene una finalidad exclusivamente económica, también tienen tras de sí intereses políticos. A través del CAFTA, los Estados Unidos busca consolidar el modelo neoliberal en los países centroamericanos. Un modelo que en los últimos años ha demostrado graves deficiencias para hacer frente a las necesidades materiales más importantes de la mayoría de los salvadoreños.

Reflexiones en torno al diálogo, hoy

A finales de 2004, se escribía desde este semanario: “Está fuera de discusión la posibilidad del diálogo en El Salvador. Se requiere una muestra de voluntad política por parte de los sectores involucrados para sentarse a dialogar, partiendo de la premisa que las posiciones no deben ser inflexibles. Lo anterior no supone que no se mantengan ‘puntos de honor’, como de hecho sucede en cualquier situación de diálogo. En El Salvador, el diálogo es posible, no sólo porque es necesario, sino porque la historia lo ha demostrado”. (*Proceso*, No. 1123)

Ahora bien, descontada su necesidad y su posibilidad, conviene volver sobre el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos, sobre todo cuando actualmente distintos sectores se encuentran en pugna en torno a temas de interés nacional, tales como el transporte público, el desarrollo y conectividad de las zonas rurales, las medidas paralelas al CAFTA y los planes estatales para revertir las estadísticas de violencia y disminuir la pobreza, entre los más sonados. Pero ni siquiera el único ejercicio de diálogo nacional conocido desde la firma de la paz, el Plan de Nación, ha sido aprovechado por los salvadoreños.

Nos separan siete años desde que en 1998 la Comisión Nacional de Desarrollo presentara al entonces presidente de la República, Armando Calderón Sol, y al país entero, el documento *Bases para un plan de nación*. Era la primera vez, desde los Acuerdos de Paz, que un grupo de salvadoreños notables se sentaba para discutir el estado y el rumbo de la nación. Meses después, luego de intensas jornadas de consulta en todo el territorio nacional —y coincidiendo con el preludio del ascenso de Francisco Flores al Ejecutivo—, la Comisión presentaría a la sociedad el documento titulado *Temas claves para el Plan de Nación*, un compendio de los principales retos de El Salvador de cara a los próximos años.

El documento suscitó un ambiente de debate nacional, pero pronto fue ahogado desde la misma casa de gobierno: Francisco Flores ignoró el esfuerzo propiciado por su predecesor. Pero Elías Antonio Saca parece

haber aprendido la lección: en la segunda semana de enero de 2005, honrando una promesa electoral, apoyó el relanzamiento del Plan de Nación. Sin embargo, a juzgar por la limitada atención que Casa Presidencial le ha prestado al asunto y por las actuales prioridades del Ejecutivo, pareciera que la vuelta al Plan obedece más a la insistencia de sus gestores —miembros de la sociedad civil— que a una voluntad expresa del presidente y su equipo de gobierno. Es más, desde enero a la fecha, poco se ha vuelto sobre el asunto.

Uno de los mayores méritos del trabajo de la Comisión ha sido el énfasis en el desarrollo territorial —especialmente las zonas del país con gran potencial económico y social que han sido rezagadas— y la integración de todo el país. No es de extrañar que los inicios de la Comisión coincidiera con la emergencia de los discursos —defendidos por municipalidades y asociaciones comunales— que enfatizaban el desarrollo local. Así, la Comisión Nacional de Desarrollo se llevó las palmas en su intento.

Un plan de nación no sería tal si no involucrara a la sociedad en su conjunto, extendiéndose por todo su tejido. Sin embargo, ni el gobierno ni la sociedad han asumido el papel que les corresponde en la construcción de un verdadero plan de desarrollo nacional pensado a largo plazo.

Algunos sectores de la sociedad civil — como la Comisión misma— sí han asumido un rol activo en esta tarea, pero su esfuerzo se torna poco útil si no se involucran todas las fuerzas de la sociedad, incluyendo a los partidos políticos, empresarios, sociedad civil organizada y al Estado mismo.

La irrupción del Plan de Nación coincidió con los últimos meses del gobierno de Calderón Sol. Al término de éste, se escribía desde el editorial de *ECA*: “El Salvador perdió cinco años que pudieron haber sido aprovechados para fortalecer la institucionalidad, estimular la producción —creando empleo y elevando el ingreso familiar— y reconstruir las relaciones sociales”.

El ejercicio de las *Bases para un plan de*

nación —se lee en aquel editorial— “es una oportunidad para formular una propuesta de desarrollo concertada y viable, cuyos frutos podrían verse en el corto y mediano plazo”. Pero la historia es de todos conocida. La llegada de Flores a Casa Presidencial marcó el inicio de otra larga postergación de una agenda nacional de reconstrucción. Su gestión tampoco fue bendecida por la naturaleza: Flores tuvo que enfrentar las secuelas de la tormenta tropical Mitch y de dos sucesivos terremotos en 2001. Un pretexto utilizado por los titulares de gobierno para justificar los magros resultados económicos acumulados desde la administración de Calderón Sol.

Como sea, Flores dejó el despacho presidencial rodeado de un halo de confrontación y con los niveles más bajos de entendimiento nacional registrados desde la firma de la paz. El reto de Antonio Saca incluía sacar al país de ese sombrío escenario, lo cual logró momentáneamente hasta que la testarudez de un FMLN y la recaída autoritaria del partido oficial y el aparato estatal que controlan reclamaron nuevamente su lugar tras años de enquistamiento. En ese panorama Saca retoma el Plan de Nación, si bien gozando de importantes niveles de aceptación entre los salvadoreños, pero subestimando a quienes deberían ser sus más cercanos interlocutores en el diálogo que presupone dicho Plan: sociedad civil, partidos políticos y empresarios.

En definitiva, la asimilación de un verdadero Plan de Nación, al margen de la escasa propaganda gubernamental o particular del mismo, requiere algunas condiciones objetivas y subjetivas que son bienes escasos en El Salvador. Por el lado de los factores objetivos, el país echa de menos cierta capacidad administrativa necesaria para impulsar un salto cualitativo en cuanto a desarrollo se refiere; también adolece de ciertas debilidades estructurales en su entramado institucional, al tiempo que escasean los recursos financieros, por mencionar lo imprescindible. Desde el punto de vista de las condiciones subjetivas, los salvadoreños no han alcanzado la cuota necesaria de cultura política para asumir los retos de la descentralización, participación política, rendición de cuentas y control ciudadano. Tampoco parece haber

suficiente voluntad política para impulsar los cambios necesarios.

Un Plan de Nación no sólo presupone recursos y obras de infraestructura —por más que el Ejecutivo anuncie pomposamente el rescate del Puerto de La Unión y la captación de recursos quién sabe de dónde—, sino un cambio de actitud que los salvadoreños no muestran en la actualidad. Presupone, además, un clima propicio para el diálogo y el entendimiento, que también se echa de menos. Un nuevo retroceso del Plan sería otra oportunidad perdida para El Salvador y señalaría, entre otras cosas, que el Ejecutivo simplemente utilizó el trabajo de una Comisión para sus intereses políticos.

Desde ámbitos no estrictamente políticos también se han hecho intentos por montar espacios de diálogo. Basta mencionar dos de ellos: desde la empresa privada y el esfuerzo de la nueva administración de CONCULTURA por establecer un “diálogo nacional por la cultura”. Así, desde el empresariado nacional se ha discutido el tema que ocupa estas líneas. En el último encuentro de la ANEP, el ENADE 2004, se hizo eco del diálogo social. En noviembre pasado, los empresarios invitaron al español Jaime Montalvo Correa, para que les disertara sobre esa temática. Montalvo explicaba, entrevistado por *La Prensa Gráfica*, que “la democracia es diálogo. Dialogar no es entregarse a la voluntad del otro. Es conocerla, valorarla y debatirla. Ese es un comportamiento de progreso”. Pero pasada la noticia y el revuelo por los sesudos análisis del connotado visitante, la prensa no volvió sobre el tema.

Otros esfuerzos surgen de situaciones conflictivas, como el caso concreto de las municipalidades que enfrentan situaciones tensas con vendedores informales, sindicalistas, empresarios y otros sectores organizados. También en el sector del transporte público se han visto iniciativas de diálogo, pero la constante es la misma: la inflexibilidad y la defensa a ultranza de intereses particulares, primando frente al interés nacional. Ante estas posturas se impone la necesidad y posibilidad del diálogo, pero ninguno de los sectores nacionales muestra disponibilidad para ello.

Incertidumbre alrededor del CAFTA-RD

Puestos a comparar las expectativas de los propugnadores del Tratado de Libre Comercio entre EEUU, Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés) con la situación actual del mismo, encontraríamos el desajuste que suele haber entre el *deber ser* con lo que, efectivamente, es.

Los diseñadores del tratado pensaron que el tratado pasaría del papel a la práctica por la vía expedita, o, para usar la expresión al uso, por el carril rápido, *fast track*. Transcurridas las largas negociaciones del CAFTA-RD, la etapa de ratificación del tratado por parte de los legislativos centroamericanos marchó relativamente bien. Tal y como se ha analizado en este semanario, los mayores obstáculos han surgido en los EEUU. Las deliberaciones en el Congreso norteamericano sobre la ratificación continúan en medio de una atmósfera de incertidumbre. Ahora las baterías del Ejecutivo estadounidense y de los defensores del CAFTA-RD están enfiladas en persuadir a los congresistas indecisos, quienes ascienden a 67 —43 republicanos y 24 demócratas—. El proceso de ratificación del tratado no ha podido ser más engorroso: dado el sistema político norteamericano, debe someterse a aprobación en las dos cámaras legislativas del congreso estadounidense.

El problema parece residir en la rentabilidad del tratado, que muchos han puesto en cuestión. En ese sentido, sectores como el azúcar o los textiles ven en peligro sus intereses. De esta manera, los intereses comerciales de estos sectores tienen representación en el congreso estadounidense.

La aprobación del CAFTA-RD se juega a una ronda decisiva. El resultado de los debates en el congreso estadounidense será inapelable. Por ello, la administración

Bush siente que el tiempo se le acorta. De ahí que la intervención del mandatario estadounidense George W. Bush ante la Organización de Estados Americanos (OEA) haya sido una vehemente defensa del tratado comercial, en la que el discurso antiterrorista se entrelazó con el tema del desarrollo de las economías involucradas en el CAFTA-RD.

“Qué hermoso edificio —comenzó diciendo el mandatario—. Lo que lo hace aún más hermoso es que la Organización de Estados Americanos promueve la democracia y la libertad. No hay nada más hermoso que la libertad. Y yo aprecio vuestro compromiso con la democracia y la libertad. Y aprecio la oportunidad de acudir a hablar sobre un tratado —el CAFTA— que no sólo le dará mayor prosperidad a nuestro hemisferio, que no es sólo un buen trato para los trabajadores, dueños de negocios y agricultores de los EEUU; este tratado ayudará a expandir la democracia y la paz”.

Aquí puede verse que el presidente Bush pretendía matar dos pájaros de un tiro: disipar las dudas sobre la rentabilidad del CAFTA-RD y presentarlo como un eje central de los intereses estadounidenses (“democracia y paz”) en la región centroamericana y la isla caribeña.

¿CAFTA y terrorismo?

El punto central del discurso no fue, empero, su parte más emotiva. Esta última se compuso de emotivas condenas contra el terrorismo islámico, aunque sin nombrarlo directamente, salvo una alusión a los talibanes: “tienen una visión diferente del mundo. No creen en los derechos de las mujeres. Usurparon una gran religión y la definieron en sus términos. Y si usted vive en una sociedad dominadas por ellas, como ocurría con los talibanes en Afganistán, y

usted no se adhiere a su visión religiosa, será castigado”.

Eso bastaba para defender, según el mandatario su propia política guerrerrista, justificada, según él, porque sus enemigos “son asesinos, asesinos a sangre fría que abrazan una ideología de odio”.

Mencionar todo esto —en concreto, fueron tres párrafos sobre terrorismo, odio, libertad, democracia, guerra, temores—, ¿habrá sido un exabrupto del presidente Bush? ¿O simplemente preparó un clima emotivo para exponer, a continuación, las ventajas que, para él tendría el CAFTA-RD? El discurso antiterrorista es el argumento de un tiempo desesperado.

Las supuestas ventajas del CAFTA-RD

Téngase presente que Bush habló en un foro interamericano —una reunión de la OEA frente a los gobernantes de todo el continente, salvo Cuba— como si se estuviera dirigiendo a los legisladores norteamericanos. Habló de “nuestra vecindad” para referirse al continente, como otros presidentes estadounidenses han hablado de “nuestro patio trasero”, en otra alusión arquitectónica.

Para hablar en oro, Bush prometió varias cosas a los empresarios y sectores productivos de su país: que el CAFTA “incrementará las exportaciones agrícolas en un billón y medio de dólares”, que la ratificación del tratado “reducirá el déficit comercial en más de 750 millones de dólares” y que, además, el CAFTA-RD incrementará las exportaciones manufactureras norteamericanas al Istmo y a República Dominicana en un billón de dólares, es decir, en un 7%.

Lucha contra el reloj

El panorama es complicado, porque hay sectores que se muestran refractarios a la ratificación del CAFTA-RD, dados los intereses económicos que hay en juego. Pero, por otra parte, también sería demasiado dar por descontado que el

tratado no se ratificará. Lo cierto es que se está luchando contra el tiempo. En primer lugar, porque, como ya se dijo, la decisión que se obtenga sobre la ratificación será definitiva. No habrá una segunda oportunidad para nadie. En segundo lugar, y eso es lo que le añade dramatismo al asunto, tal decisión debe producirse en la presente semana, antes que el congreso estadounidense entre a vacaciones.

En ese sentido, pueden verse ya los últimos movimientos de los ajedrecistas. El lunes por la tarde, el portavoz presidencial Scott Mclellan urgió a los legisladores a aprobar la ratificación del CAFTA-RD. Ese mismo día, el gobierno salvadoreño anunciaba el viaje de la ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, a la capital estadounidense, para reunirse con los legisladores estadounidenses y tratar de persuadirlos de que ratifiquen el convenio comercial.

Por su parte, un grupo de parlamentarios de izquierda de varios países latinoamericanos expresaron su oposición ante el tratado. Habría que ver hasta qué punto la izquierda parlamentaria —al menos en El Salvador— es o no una fuerza decisiva, dada su fragmentación interna y el apareamiento de nuevas expresiones políticas que intentan aparecer con un perfil propio.

La incertidumbre generada por las maratónicas deliberaciones y negociaciones en el congreso de los EEUU hace volver sobre un tema que ya se ha planteado en ocasiones anteriores. Las palabras de Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, arzobispo capitalino, lo sintetizan efectivamente: “lo único que esperamos es saber qué va a pasar, y qué medidas se van a tomar de no ratificarse el tratado de libre comercio”.

La región, que supuestamente será la gran beneficiaria del CAFTA-RD, no puede de ningún modo jugar todas sus cartas en un tratado del que se ignora si se pondrá en efecto o no. ¡Cuán necesario sería recuperar el espíritu del Plan de Nación, en el sentido de buscar unas bases para un modelo de desarrollo a largo plazo!

Libertad de expresión en El Salvador

El 31 de Julio se celebra en nuestro país el “Día del Periodista”. La ocasión es propicia para que la mayoría de instituciones públicas y privadas reconozcan el esfuerzo de los hombres y mujeres que trabajan por conseguir y presentar las noticias diariamente, a través de los medios de comunicación.

Sin embargo, para el ámbito de los derechos humanos esta fecha debe significar algo más que un simple agasajo gremial. Las y los periodistas son agentes fundamentales para ejercer el derecho de la libertad de expresión e información y a través de ellos se canalizan públicamente los diversos acontecimientos de la vida nacional. La libertad de expresión es fundamental para asegurar una vida democrática y que tanto el Estado como el individuo sean responsables por sus acciones y políticas.

En El Salvador, este derecho es definido en el Artículo 6 de la Constitución de la República. Igual, dicha facultad se encuentra consagrada en el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ambos dicen básicamente que toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos, siempre que con ello no subvierta el orden público, lesione la moral, el honor; ni la vida privada de los demás.

De esta forma se tiene que la referida libertad, si bien no es absoluta, se le considera un derecho humano muy importante y sus restricciones son nada más aquellas que pueden desnaturalizar a la difusión fluida de las ideas y opiniones.

En la implementación práctica del derecho aludido tenemos que, luego de la finalización del conflicto armado, los gobiernos salvadoreños han alardeado de propiciar y respetar la libertad de expresión e información. La postura oficial parece ser, en términos generales correcta, pues la presencia de la oposición política en los medios de comunicación y el espacio que se brinda para las personas puedan criticar al gobierno lo sustentan.

Sin embargo dejar las cosas hasta ahí resultaría ver el problema de manera incompleta. Primero, porque no son equivalentes las oportunidades y espacios que ocupan los personajes que critican a las autoridades frente a los que apoyan y difunden la versión gubernamental de los asuntos de interés público. Normalmente, las empresas de información más grandes, y por tanto con mayor incidencia, prefieren mantener sus espacios de noticias saturados de datos y entrevistas acordes con sus líneas editoriales pro gubernamentales, en detrimento de las personas que no comparten dichas interpretaciones.

En esos medios se potencia cualquier logro del partido político en el gobierno, por insignificante o irreal que sea, y por otro lado se magnifican los yerros de la oposición, aunque éstos a veces sean intrascendentes. Así que, mientras teóricamente cualquier persona podría manifestar y difundir lo que piensa, lo cierto es que existe cierta información que el público no recibe con la misma amplitud con la que recibe otra y ello depende de la línea política del medio de información. Ello afecta el irrestricto cumplimiento del derecho que comentamos.

Otro problema muy grave es que el acceso a la información certera es limitado y en consecuencia, el derecho a recibir noticias verdaderas se encuentra siendo vulnerado. Para muchos casos se tiene que el gobierno y sus protectores hacen un gran esfuerzo en esconder la verdadera realidad de los más trascendentes problemas del país.

Por ejemplo, ante la crisis económica nacional, las autoridades y algunos medios de comunicación potencian la difusión de datos que no abordan el tema con profundidad. Así, se enaltece la estabilidad macroeconómica del país, pero muy poco se dice de la desaceleración en la economía, el cierre de fuentes de trabajo y el aumento de la brecha diferencial entre pobres y ricos, a favor de estos últimos.

En materia de seguridad pública, existen diferencias importantes entre las cifras que proporcionan las diversas instituciones que manejan los datos sobre el número de homicidios en el territorio nacional, lo que lleva a que algunas de ellas traten de presentar una menor cantidad de personas asesinadas para evitar las críticas hacia su trabajo. Con este tipo de informaciones se confunde a la opinión pública y se le esconde a la población lo que realmente ocurre a diario.

Un tercer obstáculo para la libertad de expresión en nuestro país es el afán deliberado de los grandes medios de difusión para no cubrir ciertas noticias y con ello mantener oculta la ocurrencia de hechos importantes para la vida nacional.

Un ejemplo de esto último es lo acontecido en el caso del enjuiciamiento del ex Viceministro de Seguridad, coronel Carranza. Dicho militar de baja, está siendo juzgado en Tennessee, Estados Unidos, por violaciones de derechos humanos durante la guerra. Muy pocos medios nacionales le dieron cobertura a la noticia, pero la mayoría pasó desapercibida la información para evitar que la población conozca que se comienza a hacer justicia en algunos casos del pasado. Ello tira al vacío el discurso estatal de que en el país se respiran aires de libertades.

El ocultar la verdad hace que los pueblos vivan en la oscuridad de la mentira y que no tengan herramientas para decidir sobre bases reales su futuro político. Ningún gobierno debería tener la posibilidad de decidir si debe decir la verdad o no a la sociedad, sino que debe darse por hecho que permitirá que las cosas se conozcan tal cual ocurren, en idéntica línea deben operar también los medios de comunicación.

Es importante notar además, que el derecho a la libertad de expresión requiere que el periodista sea responsable. Ello con el manejo de la información que se publique, que tenga fuentes reales, que diga la verdad de lo averiguado y que no reciba dinero ni dádivas por publicar ciertos hechos. Muchos piensan hoy en día, que algunos periodistas son capaces de publicar

cualquier cosa por obtener mayores beneficios económicos personales o para la empresa que trabajan. La verdad es que la integridad del profesional del periodismo es también un valuarte fundamental en todo este tema, porque alguien no íntegro pone en riesgo la credibilidad de lo que se da a conocer públicamente.

Trece años han pasado desde que se terminó la guerra. Existe más libertad de expresión que antes, eso sin duda alguna. Durante esos viejos tiempos incluso se mataban a periodistas. También amenazaban y difundían el miedo para silenciar las palabras. Periodistas nacionales e internacionales fueron atacados y perseguidos por la labor que hacían para descubrir y difundir la verdad.

Ahora las cosas han cambiado y los obstáculos para el periodismo libre e independiente son otros. Hoy la amenaza al derecho de la libertad de expresión viene tanto del Estado como de los propietarios de los medios de prensa, que muchas veces potencian sus propios intereses económicos y políticos. No tenemos ahora matanzas de periodistas, pero muchos de ellos sí siguen recibiendo presiones laborales o amenazas personales.

Por ejemplo, recientemente el periodista Willfredo Salamanca publicó en el periódico que trabaja una información obtenida de la Fiscalía de Houston sobre el pastor Edgar López Bertrand (Hermano Toby). El clérigo iba a declarar su culpabilidad en un juicio que se le sigue en Houston, Texas por haber hecho falsas declaraciones en dos ocasiones para poder obtener un pasaporte estadounidense. Días después, y durante dos días Salamanca fue amenazado e insultado por miembros de la iglesia del Hermano Toby.

En suma, el derecho a la libertad de expresión es vital para que la sociedad siga adelante. Es una forma de asegurar que las acciones del estado hacia el pueblo vayan regidas según las leyes, por ello debe defenderse y potenciarse para poder afirmar que efectivamente el mismo se respeta en nuestro país, pues en la actualidad aún falta mucho camino recorrer.

A continuación, presentamos la introducción al documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Objetivos de desarrollo del milenio. Una mirada desde América Latina y el Caribe, elaborado por José Luis Machinea, Alicia Bárcena y Arturo León. El documento fue publicado en junio de 2005.

Introducción a *Objetivos de desarrollo del milenio*

El eje articulador de este documento es el tema de la desigualdad. A pesar de haber registrado algunos notorios adelantos en materia social, América Latina y el Caribe ostentan la lamentable característica de seguir siendo la región más inequitativa del mundo.

La región, afectada por bajas tasas de crecimiento por largos períodos, ha sido incapaz de reducir la desigualdad en la distribución del ingreso y en el acceso a activos productivos. En no menor medida, esto se ha visto agravado por la falta de empleos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, que permitan a los trabajadores liberarse del flagelo de la pobreza. Quienes viven en esa situación ven que sus hijos tienen escaso acceso a servicios adecuados de salud y de educación y, en muchos casos, a una adecuada alimentación. Todos estos factores redundan en la muy alta probabilidad de que los hijos de los pobres no consigan empleos de calidad y permanezcan en tal situación al llegar a la vida adulta, lo que constituye una importante manifestación del círculo vicioso de la pobreza.

Como se verá a lo largo del texto, la desigualdad inicia, el insuficiente y volátil crecimiento económico y la concomitante falta de empleos de calidad están en la base de la persistencia de la pobreza, que afectan en promedio al 43% de la población, incluido un 19% que vive en la pobreza extrema. Es imperativo, entonces,

ocuparse de tales factores si se desea reducir la pobreza. La numerosa masa de personas que vive en situación de pobreza, debido a las desventajas educativas y de salud en que se encuentran, ve menguadas sus posibilidades de participar en el desarrollo económico de sus países y de contribuir a este en mayor medida que en la actualidad. Por esa razón, el país en su conjunto está en desventaja para reducir la brecha económica y social que lo separa de los países más desarrollados.

En el curso del análisis también quedó manifiesto otro conocido mecanismo causal circular que influye en el desarrollo de nuestros países: el bajo nivel de ingresos no permite ahorrar los recursos que se requieren para realizar inversiones en la magnitud necesaria para elevar la productividad y acrecentar por esa vía el producto a un ritmo satisfactorio. Además de esta relación entre ahorro e inversión globales, es importante destacar que, en ese marco de bajos ingresos, el fisco no dispone de suficientes entradas para impulsar decisivamente la inversión en infraestructura económica e infraestructura social.

En otra dimensión, no puede dejar de considerarse que los círculos viciosos aludidos suelen dar lugar a problemas de gobernabilidad que, graves en sí mismos, pueden contribuir a aherrojar a muchos países en la desmedrada situación en que se encuentran.

Asimismo, se pudo comprobar que varios países de bajo nivel de ingreso, que han registrado mayor progreso económico en los últimos años, lograron avances aislados pero importantes a través de programas sociales específicos en algunas de las dimensiones de la pobreza, lo que revela que hay programas que pueden elevar el bienestar de los sectores más necesitados mientras se encuentran soluciones más estructurales al fenómeno de la pobreza.

En el presente informe se indica, además, que en el plano internacional se hace imprescindible la realización de ciertas acciones por parte del mundo desarrollado, incluida la cooperación para el desarrollo, sin las cuales no será posible alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio y lograr un desarrollo económico y social armónico a escala global.

Principales hallazgos, desafíos y orientaciones de política

A lo largo del informe se abunda en detalles sobre la situación en que se encuentra la región cinco años después de la aprobación de los objetivos de desarrollo del Milenio. Del análisis surgen fundadas orientaciones en materia de políticas públicas, tanto para los países de la región como para la comunidad internacional. Sin ánimo de presentar aquí una síntesis acabada y completa de todo ello, cabe destacar los elementos más significativos, comenzando por los hallazgos o comprobaciones:

- i) El progreso registrado en la consecución de la meta de pobreza extrema es insuficiente; el examen basado en líneas nacionales calculadas por la CEPAL indica que solo un país ha llegado ya a la meta y que cinco lograron un progreso importante y probablemente la alcanzarán. En todos los países restantes, el avance fue escaso o, como sucedió en algunos, se registraron retrocesos.
 - ii) Sin embargo, la región está en vías de cumplir la meta sobre hambre. De hecho, en 15 de 24 países se redujo la subnutrición, pero es inquietante que la mayoría de los países con mayor rezago no hayan progresado a un ritmo acorde con el logro de esta meta.
 - iii) Los problemas de insuficiencia de empleos y de baja calidad de estos son los más apremiantes: el desempleo abierto aumentó del 6,9% en 1990 al 10% en el 2004, y el sector informal urbano y las actividades agrícolas de baja productividad absorben más de la mitad del empleo en la región. En los objetivos de desarrollo del Milenio no se destaca suficientemente este problema de primordial importancia para la región.
 - iv) El avance en la consecución de algunas metas (entre otras, la equidad de género en la educación, el acceso a fuentes mejoradas de agua y la reducción de la mortalidad en la niñez) indica que la región se encuentra en vías de alcanzarlas.
 - v) La degradación del medio ambiente natural y construido, que es alta y va en aumento, tiene efectos negativos para la población pobre, tanto de las zonas urbanas como de las rurales.
- A continuación, se mencionan algunos de los principales desafíos en materia de políticas:
- i) La reducción a la mitad de la pobreza extrema y el hambre hasta el año 2015 exige un crecimiento económico rápido y sostenido, de por lo menos un 2,9% por habitante, en la próxima década. En los países más pobres y que han progresado mucho menos en los últimos 14 años, el incremento debe ser de un 4,4% anual en promedio.
 - ii) El crecimiento económico no es suficiente para lograr los objetivos de desarrollo en la región; una adecuada

aproximación al crecimiento con equidad implica cambios institucionales que permitan colocar a las políticas sociales en el centro de las estrategias de desarrollo.

- iii) Junto con reducir la pobreza y el hambre como urgencias de corto plazo, es necesario invertir en capital humano mediante programas sociales como las transferencias monetarias condicionadas para asegurar la atención de la salud y la asistencia escolar en el nivel primario y secundario, y los programas de alimentación escolar, nutrición y atención médica preventiva, especialmente a embarazadas y a recién nacidos.
- iv) Los países de la región deben hacer un gran esfuerzo interno para cumplir los objetivos de desarrollo del Milenio. Entre otras cosas, es indispensable que lleguen a un consenso sobre un verdadero nuevo pacto fiscal, que asegure el uso eficiente de los recursos del Estado, la transparencia en su manejo, una clara rendición de cuentas y una mayor disponibilidad de fondos para que el fisco pueda cumplir con las nuevas demandas de acción. Aun así, se requerirá un aumento de la asistencia oficial para el desarrollo a los países más pobres de la región, entre ellos Bolivia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua, a fin de complementar sus recursos internos.
- v) Es imperativa la conclusión exitosa de las negociaciones de Doha para el desarrollo, lo que supone permitir el acceso de la región a los mercados de los países desarrollados, especialmente los de productos agrícolas.

Capítulos

En el *capítulo I* se presentan un balance de los logros obtenidos por los países de

América Latina y el Caribe en los últimos años en materia de desarrollo y de los obstáculos que lo dificultan, así como reflexiones sobre diversas alternativas para enfrentar los desafíos del desarrollo contemporáneo. El análisis de este tema es imprescindible para la consecución de los objetivos, en especial los relativos a la pobreza. Para enfrentar tales desafíos en las actuales circunstancias habría que adoptar una estrategia integral, puesto que ya no es posible diseñar una política económica sin tomar en cuenta los objetivos sociales y tampoco es posible formular adecuadamente políticas sociales si no se toman en consideración los objetivos económicos, lo que queda especialmente de manifiesto en el caso de la educación.

En el *capítulo II* se describen las principales características de la desigualdad que caracteriza a la región en términos de distribución del ingreso. La extrema pobreza y las carencias que enfrentan vastos sectores de la población no solo son consecuencia del bajo nivel de ingreso en la mayoría de países, sino también de la persistencia de una muy desigual distribución de ese ingreso. Esta situación queda claramente en evidencia en relación con las metas sobre pobreza extrema y hambre. Varios estudios han demostrado que el número de años necesarios para alcanzarlas se reduciría significativamente si el crecimiento económico fuera acompañado por una mejor distribución de sus frutos (CEPAL, 2003a y CEPAL/IPEA/PNUD, 2003). De hecho, los países que presentan las situaciones más críticas en materia de alimentación podrían reducir a la mitad el porcentaje de la población que padece hambre si disminuyeran moderadamente las desigualdades de acceso a los alimentos (CEPAL, 2003^a).